



Vista aérea de los tubos del trasvase a su paso por Orihuela. TONY SEVILLA

El PP lleva al pleno de la Diputación el rechazo al recorte del trasvase e insta a Puig a sumarse a un frente común para defender la infraestructura

Los populares acusan al jefe del Consell de "desinterés" y "pasividad" en la defensa de los intereses hídricos de la provincia y le exigen una "defensa férrea" como aseguran ejercen los gobiernos de Andalucía y Murcia

0

Rubén Míguez

03·05·22 | 13:12 | **Actualizado a las 13:21**

El grupo popular de la **Diputación de Alicante** llevará al pleno de este miércoles una moción de rechazo al recorte del trasvase Tajo-Segura tras la **aprobación del nuevo Plan Hidrológico** de la cuenca del Tajo. Los populares elevan la presión en la defensa de esta infraestructura vital en el sureste e **instan a la Generalitat Valenciana a sumarse a un frente común** para defender la infraestructura que riega y da de beber a buena parte de la provincia. Censuran este "ataque" que, añaden, viene a confirmar "desgraciadamente" la que aseguran es la hoja de ruta del Gobierno de **Pedro Sánchez** de "**acabar injustificadamente**" con esta infraestructura. Y acusan al presidente de la Generalitat, al socialista **Ximo Puig**, de "inacción", "desinterés" y "pasividad" en la defensa de los intereses hídricos de la provincia de Alicante. "Resulta inaudito que el Consell de todos los

valencianos no se sume al frente común" y a la "defensa férrea" que, según los populares, **están ejerciendo los gobiernos autonómicos de Andalucía y Murcia, gobernados por el PP**, para impedir que el Ejecutivo central recorte el trasvase Tajo-Segura", insiste la moción, que defenderá el diputado popular **Eduardo Dolón**.

En el acuerdo que pretende aprobarse en la institución provincial, la Diputación exige al Gobierno que no recorte el caudal de agua en el trasvase y **reivindica la vigencia de la infraestructura para el desarrollo y progreso del levante español**. Además, insta al Consell a ir de la mano en su defensa y **que se posicione en contra del aumento de los caudales ecológicos del Tajo**, que suponen una **reducción del trasvase de 105 hectómetros cúbicos al año**.

La Diputación, a instancias de su presidente **Carlos Mazón**, ya interpuso un **recurso** ante el Supremo. Las consecuencias económicas y sociales que, expone la moción, traerá consigo el recorte del trasvase, se basan en un **informe de Instituto del Agua de la Universidad de Alicante**, que forma parte de la documentación que prepara la Diputación para plantear el recurso por la vía de lo contencioso-administrativo contra el cambio de las reglas de explotación del Tajo-Segura.



La Diputación reclamará 5.000 millones de euros de indemnización para los regantes por el recorte del trasvase

F. J. Benito

Así, en el texto que los populares llevarán al pleno, y que esperan que cuente con el apoyo del resto de grupos políticos, se recuerda que el trasvase, que **ha cumplido 43 años**, es **vital para el sostenimiento social, económico y social de la provincia**. Su recorte, indica el texto, es una **"nueva decepción" por parte de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera**. Esta reducción de caudales, alerta, traerá consigo una **pérdida del 15,62% de la superficie de regadío** que debería dejar de regarse y pasar a secano o abandonar la explotación agraria, con todas las pérdidas que esto conlleva. Todo ello se traduce en la **pérdida de unas 27.314 hectáreas**, "una condena al campo, a los agricultores y al sector agrícola" de la provincia de Alicante. Los efectos económicos negativos derivan de la merma en dos diferentes sectores. De una parte, la reducción del valor de los activos

productivos (precio de la tierra); y, por otro lado, el lucro cesante experimentado por las explotaciones a través del margen neto. Es por ello por lo que la institución provincial cifra una **pérdida patrimonial de 5.327 millones de euros (1.366 por el regadío activo y 3.961 de lucro cesante)**.

Además, según la moción, a estas "alarmantes" cantidades habría que añadir los costes derivados del despido de unos 15.322 trabajadores, sumando las prestaciones económicas derivadas de la pérdida de su empleo. Concretamente, para la provincia de Alicante **significaría la pérdida de unos 6.000 empleos directos**, cifra similar, recuerdan los populares, al número de trabajadores en la plantilla de Ford en Almussafes. Esta consecuencia es "inaceptable e "insostenible para una provincia tan castigada por las consecuencias de la crisis sanitaria, de la que todavía no se ha recuperado", señala la moción.

El texto insiste en la solidaridad que trajo consigo el trasvase y sus **efectos positivos en la cohesión territorial y social de España**, además de constituir una garantía para evitar la desertización del territorio. El PP defiende que está demostrado científicamente que unos caudales menos elevados no significan ningún riesgo para la salud del río Tajo, como mantiene el Gobierno estatal y el de Castilla-La Mancha. Por tanto, concluyen es "**totalmente incomprensible**" este "nuevo golpe" al sector agrícola de la provincia.



El Gobierno no cede y subraya que el recorte del Tajo-Segura es equilibrado y hay que incorporar la desalación

F. J. Benito

Moción conjunta de PP y Cs

Por otro lado, PP y Cs presentarán una moción conjunta al pleno de la Diputación exigiendo al Consell la **retirada de la versión preliminar del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja**, que cuenta con el **rechazo de entidades públicas y privadas y de ayuntamientos** de distinto signo político, como Orihuela, Redován, Almoradí, Benferri, Guardamar del Segura, Callosa de Segura, Rojales o Torrevieja. También se han posicionado en contra la Cámara de Comercio, Asaja y el Sindicato Central de Regantes, entre otros.

El texto defiende que la versión preliminar del instrumento de ordenación territorial que se pretende aprobar **vulnera la debida aplicación de los principios de coordinación y colaboración con las administraciones públicas locales**, así como el de autonomía local, ocasionando que, "lamentablemente", su rol en el procedimiento pase de ser de interesadas a afectadas al omitirse su participación en su elaboración. Además, PP y Cs consideran que el documento establece unos criterios a cumplir por el PAT -de utilización racional de suelo, de protección del medio natural, de prevención de riesgos naturales e inducidos, de uso sostenible y protección de los recursos hídricos, de conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural, de adecuada gestión de los residuos, de implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos, de mejora del entorno urbano, de integración de la infraestructura verde, de eficiencia de la movilidad y fomento del transporte público, de la mejora de la ordenación e implantación de equipamientos y dotaciones públicas y de protección del paisaje- que solamente son exigibles a un Plan General y en el ejercicio de competencias compartidas entre la administración autonómica y la local. **"Nos encontramos ante un Plan redactado desde la lejanía de Valencia y con una visión pura y netamente geográfica"**, censura la moción, que también critica que la memoria económica carece tanto de medidas reales y específicas para "el temerario" cambio de modelo económico que se pretende y la materialización de sus "limitativas previsiones", ni tampoco tiene un análisis del impacto del "grave impacto" de las mismas sobre las arcas municipales y los ciudadanos.



El Plan de Acción Territorial del Consell para la Vega Baja recibe 1.300 alegaciones

Loreto Mármo1

Populares y naranja acusan al Consell de redactar un PAT marcado por directrices y orientaciones de **"políticas extremas"** con una marcada **"regresión socioeconómica a siglos anteriores, carente de oportunidades y que aventura pobreza"**, y premonizan un **éxodo del emprendimiento** e inversiones a otras zonas de la limítrofe Región de Murcia o a otras zonas funcionales como Elche y Alicante. Y censuran que el texto no subraye la que consideran carencia de infraestructuras en esa comarca.

Por todo ello, piden al Consell la retirada de ese texto preliminar del Plan de Acción Territorial, que la Conselleria y que **inicie un nuevo proceso** dando voz a las

administraciones afectadas y a los agentes privados.